

UUNIVERSIDAD

LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIAS

Documento académico con fines de estudio

15/11/2011





LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA

En esta parte estudiaremos los Conflictos de Competencia entre las Leyes: Constitución Política de la República de Guatemala, Ley General de Descentralización, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Código Municipal.

CONFLICTO: Es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos partes o pueden ser más también, cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas.

COMPETENCIA: Es la atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto.

CONFLICTOS DE COMPETENCIA: De tal manera que refiriéndonos a las leyes arriba mencionadas, los conflictos de competencia se dan en virtud de que dichas leyes contienen preceptos o mandatos que contravienen o se anteponen a una o a todas en conjunto.

Para el caso nuestro nos centraremos en estudiar los conflictos de competencias de las leyes mencionadas y el Código Municipal, especialmente en los casos en que se afecta la autonomía de los Gobiernos Municipales.

El Código Municipal expresa en el Artículo 3. Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda.

Artículo No. 239 de la Constitución Política de la República: cierra toda posibilidad de revisión e imposición de arbitrios a las propias municipalidades, recetándose para sí mismos los diputados al Congreso de la República la exclusividad de aprobar, ampliar o reducir los arbitrios de las municipalidades.

En lo municipal, se institucionalizan en el Decreto Legislativo No.12-2002 Código Municipal **los procedimientos e instancias de participación** que faltaban en el código precedente y que significaban un obstáculo para que el municipio se convierta en un espacio primario de participación ciudadana. (Esto se solucionó con las modificaciones efectuadas al Código Municipal anterior).

No puede dejar de evidenciarse las **deficiencias observadas, por ejemplo, en el Código Municipal relativas a la organización de vecinos, alcaldías comunitarias o auxiliares, información y participación**, con excepción de los artículos relativos a la formulación e información sobre la ejecución del presupuesto, es la falta de referencias a los consejos de desarrollo, por lo que no se integran los procedimientos e instancias municipales con el Sistema de Consejos de Desarrollo, quedando como dos procesos paralelos y no interrelacionados.

En el Código Municipal se incurrió en omisiones, contracciones e inconsistencias, por ejemplo, **se omite a quién corresponde la aprobación de las tasas, fuente importante de recursos municipales.**

No hay coordinación entre las tres leyes (Ley de Consejos de Desarrollo, Ley General de Descentralización y Código Municipal), pese a que su discusión y aprobación se hizo en el mismo período legislativo –primer trimestre del año 2002-. Por ejemplo, entre las competencias del Concejo Municipal está “la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuesta de solución a los problemas locales” y entre las atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar está la promoción de la organización y participación sistemática y efectiva de la comunidad en la identificación y solución de problemas locales. Esta atribución es similar a las conferidas a los consejos municipales y comunitarios de desarrollo, **pero no se hace referencia al apoyo y coordinación entre dichos consejos y el municipal para evitar duplicidad e ineficiencia.**

Se establece las competencias de los concejos municipales, pero **no se hace referencia a la necesidad de coordinación con los consejos de desarrollo o a la obligación de tomar en consideración sus propuestas.** Los concejos municipales y la facultad de consultar a los consejos comunitarios cuando el asunto lo amerite por su importancia comunal, pero no establece la obligación del concejo municipal de llevar a cabo la consulta.

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal –INFOM (Decreto Legislativo 1132) el INFOM, se convierte en el rector del sector agua y saneamiento, lo que le permitió ampliar la cobertura de sus acciones, cubriendo tanto el área urbana como rural de los municipios. **Adicionalmente, esta ley regula la relación con las municipalidades y establece entre sus funciones principales, brindar asistencia técnica y financiera a éstas. En el artículo 4, numeral 3, se establece la asistencia técnica en formulación de presupuestos anuales y la modernización de sistemas de contabilidad, auditoría y administración financiera.**

Estatutos de la Asociación Nacional de Municipalidades- ANAM:

La asociación busca promover la defensa y fortalecimiento de la autonomía municipal, así como asistir a las municipalidades en apoyo a medios para la resolución de problemas, promoción de acción gubernamental para el impulso y desarrollo de la gestión. Promueve la participación de agencias nacionales e internacionales que impulsan el mejoramiento de gobiernos locales. En ese sentido, ANAM maneja los siguientes temas en su agenda:

- Propuestas de ley.
- Coordinar y facilitar la capacitación.
- Facilitar los hermanamientos de las alcaldías de Guatemala con alcaldías de otros países.
- Transmisión de experiencias.

La Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, es la entidad fiscalizadora superior, técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.

La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas plantea la creación de Comités de Auditoría Social, brazo social de fiscalización de la Contraloría, un tipo de control ciudadano.

El artículo 88 del Código Municipal: **establece el nombramiento de auditores internos, en los municipios. Corresponde también al tesorero municipal llevar un control que incluye cortes de caja, examen de libros, cuentas corrientes, inventarios de bienes, etc.**

Por otra parte la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos (decreto 8-97 del Congreso), tiene por objetivo regular los aspectos relacionados a la honestidad en la administración pública, que da cumplimiento a principios que norman la conducta de los servidores del Estado. En este sentido, busca

<p>garantizar el decoro, y transparencia en el manejo de recursos públicos; así como la probidad de funcionarios públicos y servidores del Estado.</p>
<p>El presupuesto es el instrumento legal por el que se lleva cuenta razón de ingresos y egresos de la municipalidad. La aprobación se establece a través de acuerdo y certificación de punto de acta de aprobación del Concejo Municipal según lo previsto en el artículo 131 del Código Municipal</p> <p>En sus artículos 237, 253 al 262, establece y regula los aspectos del Régimen Municipal (autonomía, recursos, presupuesto para infraestructura, antejuicio a alcaldes, prohibiciones, ley de servicio municipal, entre otros).</p>
<p>Ley Orgánica del Presupuesto (decreto 101-97 del Congreso): en esta ley se especifica las normas y sistemas presupuestarios de contabilidad que se establecen en las entidades de gobierno, tesorería nacional y crédito público. Los artículos 46 y 47 de la ley, así como el artículo 29 del reglamento, regulan los aspectos presupuestarios de las municipalidades.</p>
<p>Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (decreto 31-2002 del Congreso de la República): la ley es el instrumento legal que norma la función fiscalizadora de entidades públicas, en las que se incluye a las municipalidades y empresas, así como a contratistas y empresas que reciban o administren fondos del Estado. La fiscalización se enfoca a la evaluación de la probidad, transparencia, eficiencia y eficacia de la calidad del gasto público ejecutado a través del presupuesto municipal.</p>
<p>Código Municipal en el Capítulo IV de la ley se regulan aspectos generales y específicos del presupuesto municipal, tales como la estructura del presupuesto, el ciclo presupuestario, la formulación y aprobación, la participación de organizaciones comunitarias en la formulación presupuestaria y la fiscalización y rendición de cuentas. Además, cuando se consulta esta ley sobre las competencias de los distintos integrantes del gobierno municipal, dentro de esta norma éstos poseen distintas facultades dentro del proceso de elaboración y ejecución del presupuesto.</p>
<p>Existen tres elementos que por ahora son obstáculos a superar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El marco legal de los Consejos de Desarrollo, que otorga funciones que facilitan el proceso de participación comunitaria en el presupuesto municipal. A esto se agrega el Código Municipal que mantiene enunciados pero no otorga espacios administrativos dentro de la gestión municipal para concretarlo. • El concepto de participación comunitaria en el presupuesto municipal no existe como acto legitimador del gasto público o asignados de fondos públicos. Es apenas un discurso alentado como iniciativa y no como proceso. • Será necesario establecer acuerdos claros de educación y acompañamiento al gobierno del municipio para encontrar, en la diversidad cultural mecanismos para armonizar la asignación de recursos con sentido de equidad.

Fuente: Tomado de: "HAGAMOS LAS CUENTAS: Conocimiento presupuestario, apropiación ciudadana e incidencia en políticas públicas". (2004). Fundación Arias para la paz y el progreso humano. Costa Rica.